

## SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veinticinco (25) de noviembre  
de dos mil veintidós (2022)

### SENTENCIA

**Proceso** : Ordinario de Segunda Instancia  
**Demandante** : **LUIS GUILLERMO IBARRA ORREGO**  
**Demandadas** : **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES**  
**Radicado** : **05001 31 05 001 2018 00304 01**  
**Providencia** : Sentencia  
**Temas y Subtemas** : Seguridad Social – pensión invalidez de origen común, principio de la condición más beneficiosa -.  
**Decisión** : Revoca Sentencia absolutoria  
**Sentencia No** : 281

En la fecha antes anotada el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por los Magistrados **VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO** (con quien se reconforma la Sala, al haberse aceptado el impedimento declarado por el Magistrado CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES), **NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR** y **MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**, como ponente, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado, que se traduce en la siguiente decisión<sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> De conformidad con lo establecido en la Ley 2213 del 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...”, que modificó el trámite en los procesos de la jurisdicción Laboral.

## **ANTECEDENTES**

### **Pretensiones:**

Se condene al reconocimiento y pago de **pensión de invalidez**, a partir del **6 de febrero de 2017**, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, mesadas adicionales, **intereses moratorios**, indexación, costas procesales.

### **Hechos relevantes de la demanda:**

Se afirma que el señor Luis Guillermo Ibarra Orrego, cotizó 781 semanas al Sistema de Pensiones a través del I.S.S., entre los años 1977 y 1999; fue calificado por COLPENSIONES el día 12 de agosto de 2017, asignándole el 51.89% de pérdida de capacidad laboral, estructurada el día 16 de febrero de 2017; el 20 de septiembre de ese año reclamó pensión de invalidez, siendo negada mediante Resolución SUB 252794 del 10 de noviembre de 2017, por no haber cotizado 50 semanas en los tres (3) años anteriores a la estructuración de la invalidez, no obstante, para el 1º de abril de 1994, contaba con más de 300 semanas cotizadas.

### **Respuesta a la demanda:**

**COLPENSIONES** a través de apoderada judicial, aceptó lo referente al dictamen emitido, la reclamación y decisión de negar la pensión de invalidez; se opuso a las pretensiones formuladas y formuló en su defensa las excepciones denominadas inexistencia de las obligaciones reclamadas, imposibilidad jurídica de cumplir las obligaciones pretendidas, buena fe, prescripción, compensación, imposibilidad de condena en costas.

### **Sentencia de Primera Instancia:**

**El Juzgado Primero Laboral** del Circuito de Medellín, mediante Sentencia del 3 de noviembre de 2021, **declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación y absolvió a COLPENSIONES** de las pretensiones formuladas en su contra; impuso condena en Costas a cargo del demandante, fijando como agencias en derecho la suma de \$908.526 a favor de la demandada.

### **Recurso de apelación apoderado del demandante:**

Sostiene que el demandante tenía cotizadas más de 300 semanas cotizadas al 1º de abril de 1994, cumpliendo con los requisitos exigidos para acceder a la pensión de invalidez, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa y el Decreto 758 de 1990, conforme lo tiene permitido la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional, cuyo precedente es aplicable a este asunto, ya que se cumplen las condiciones del test de procedencia, teniendo en cuenta además que padece una enfermedad catastrófica; solicita se revoque la decisión adoptada y en su lugar se acojan las pretensiones de la demanda.

### **Alegatos de conclusión:**

El apoderado de **COLPENSIONES** solicita se confirme la decisión absolutoria de Primera Instancia, reiterando que el demandante no tiene derecho a la pensión de invalidez, por cuanto no cumple la densidad de semanas exigida en la norma vigente al momento de la estructuración de la invalidez y tampoco en la inmediatamente anterior, conforme al principio de la condición más beneficiosa, aplicando la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia.

Agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos y sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes,

### **CONSIDERACIONES**

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de Apelación, de conformidad con lo establecido en los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, 15 y 66 A del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

#### **Conflicto Jurídico:**

**El asunto a dirimir, radica en verificar si es procedente revocar la Sentencia absolutoria de Primera Instancia, analizándose si se cumplen los requisitos para el reconocimiento de la pensión de invalidez a favor del señor Luis Guillermo Ibarra Orrego, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa.**

**Encontrando esta Sala de Decisión Laboral procedente revocar la Sentencia de Primera Instancia;** por las siguientes razones:

No es objeto de discusión en esta Segunda Instancia, que el señor Luis Guillermo Ibarra Orrego cuenta con 66 años de edad, al haber nacido el día 30 de marzo de 1956 (fl 23); COLPENSIONES emitió dictamen de fecha 12 de agosto de 2017, asignándole el 51.89% de pérdida de capacidad laboral, con fecha de estructuración el día 16 de febrero de 2017, sustentado

en que en esa fecha la especialidad de Oncología diagnosticó “...carcinoma escamocelular de amígdala derecho T3 N1 Estadio IV-A; Posible recuperación NO; pronóstico: tumor localmente avanzado de amígdala estadio IV pronóstico desfavorable...” (fls 8 a 11); el demandante reclamó pensión de invalidez el día 20 de septiembre de 2017, siendo negada mediante Resolución SUB 252794 del 10 de noviembre del mismo año, en la que se reconocen 781 semanas cotizadas entre el 7 de marzo de 1977 y el 8 de junio de 1999, sin que cuente con 50 semanas cotizadas en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez (fls 18 y 19).

**El Juzgado de Primera Instancia consideró en términos generales**, que el demandante no cumple con el requisito de 50 semanas cotizadas en los tres (3) años anteriores a la estructuración de la invalidez, como lo exige la Ley 860 de 2003, puesto que la última cotización data del año 1999 y analizada la pretensión conforme al principio de la condición más beneficiosa, tampoco se ajusta a los lineamientos señalados por la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, que permite acudir a la norma anterior –Ley 100 de 1993 en su versión original-, siempre que la estructuración de la invalidez se hubiera dado hasta el año 2006, lo que no ocurre en este caso ya que fue estructurada en el año 2017.

**Sobre lo que es objeto de apelación, esto es, la aplicación del principio de la condición más beneficiosa para acceder al reconocimiento de pensión de invalidez, conforme a lo establecido en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, tenemos que:**

No se discute en este proceso y es aceptado por la parte demandante, que no se cumple con la densidad de semanas exigida en la norma vigente para la época en la que se estructuró la invalidez, pues entre el 16 de febrero de 2017 y el mismo día y mes de 2014, acredita cero (0) semanas, atendiendo a que la última cotización la efectuó el día 8 de junio de 1999, tal como lo explicó el Juzgado.

**Condición más beneficiosa aplicando el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 original:**

El demandante tampoco cumple las condiciones exigidas por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia para aplicar la normatividad anterior, esto es, el artículo 39 en su versión original de la Ley 100 de 1993, como lo explicó la Juez de Primera Instancia; puesto que para reconocerse hay una fecha límite, hasta el 26 de diciembre de 2006; además, en este caso, para el tránsito legislativo era cotizante inactivo y no demuestra 26 semanas en el año anterior a la vigencia de la Ley 860 de 2003.

**Condición más beneficiosa con salto normativo, para acudir al Decreto 758 de 1990:**

Para la fecha en que se promovió la demanda -25 de mayo de 2018- y cuando se profirió la Sentencia de Primera Instancia, la H. Corte Constitucional permitía por condición más beneficiosa, el salto normativo, para personas que por ejemplo en vigencia de la Ley 860 de 2003, hubieren estructurado la pérdida de capacidad laboral que le diera la condición de inválidos, aplicando el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, si cumplían los requisitos allí establecidos, sin ningún otro condicionamiento.

En el transcurso del proceso, la H. Corte Constitucional mediante **Sentencia SU 556 del 20 de noviembre de 2019**, supeditó el otorgamiento de pensiones al cumplimiento de reglas, indicando que solo procedería respecto de personas en situación de vulnerabilidad, esto es, aquellas que satisfacen las exigencias del “*test de procedencia*”, resultando razonable y proporcionado interpretar el principio de la condición más beneficiosa, aplicando de manera ultractiva las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990, en lo que respecta a la exigencia de densidad de semanas de cotización, a pesar de que su condición de invalidez se hubiere estructurado en vigencia de la Ley 860 de 2003; para efectos de otorgar seguridad jurídica y garantizar una igualdad de trato, unificó su jurisprudencia para la procedencia de la pensión de invalidez en estos casos, lo cual se satisface cuando se acreditan las siguientes cuatro (4) condiciones, cada una necesaria y en conjunto suficientes, del “*test de procedencia*”:

Test de procedencia	
<b>Primera condición</b>	Debe acreditarse que el accionante, además de ser una persona en situación de invalidez, pertenece a un grupo de especial protección constitucional o se encuentra en una situación de riesgo derivada de, entre otras, alguna de las siguientes condiciones: (i) analfabetismo, (ii) vejez, (iii) pobrezaextrema, (iv) cabeza de familia, (v) desplazamiento o (vi) padecimiento de una enfermedad crónica, catastrófica, congénita o degenerativa.
<b>Segunda condición</b>	Debe poder inferirse razonablemente que la carencia del reconocimiento de la pensión de invalidez afecta directamente la satisfacción de las necesidades básicas del accionante, esto es, su mínimo vital y en consecuencia, una vida en condiciones dignas.
<b>Tercera condición</b>	Deben valorarse como razonables los argumentos que proponga el accionante para justificar su imposibilidad de haber cotizado las semanas previstas por las disposiciones vigentes al momento de la estructuración de la invalidez.
<b>Cuarta condición</b>	Debe comprobarse una actuación diligente del accionante para solicitar el reconocimiento de la pensión de invalidez.

Es de anotarse que, conforme a las **Sentencias SU 068 de 2018, SU 354 de 2017, SU 406 de 2016 de la H. Corte Constitucional, el precedente vertical tiene carácter vinculante para los operadores judiciales, de manera general e inmediata**, siendo prevalente en materia de interpretación de

los derechos fundamentales y de la Constitución en general, buscando con ello materializar el respeto de los principios de la igualdad, la supremacía de la Carta Política, el debido proceso y la confianza legítima, mandatos que obligan a que los Jueces tengan en cuenta tales decisiones, al decidir los asuntos sometidos a su competencia.

Por lo anterior, en este caso, se verificará si el demandante cumple con el *test de procedencia* incluido en la Sentencia SU 556 de 2019, encontrándonos con que, de acuerdo a la prueba obrante en el expediente, se cumplen las condiciones establecidas allí:

**Primera condición: El demandante es persona en situación de invalidez**, según dictamen emitido por COLPENSIONES el 12 de agosto de 2017, donde le asignó el 51.89% de pérdida de capacidad laboral, de origen común, con fecha de estructuración el 16 de febrero de 2017; **se encuentra en una situación de riesgo** ya que está ubicado en el **grupo de “vejez”** por su **edad de 66 años**, al haber nacido el día 30 de marzo de 1956; tratándose de persona en situación de discapacidad **goza de especial protección constitucional**, según lo señalado en el artículo 13 de la Constitución Política, conforme al cual el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta; presenta delicado estado de salud, pues conforme al dictamen médico laboral, **fue diagnosticado con tumor maligno de la fosa amigdalina, cáncer de la fosa amigdalina**, detallándose que conforme al historial clínico, el área de Psiquiatría le diagnosticó “...**trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol, síndrome de dependencia insomnio no orgánico; ... tumor maligno de la fosa amigdalina ... cáncer de amígdala metastásico a cuello ... examen físico: malas**



**condiciones generales** sin alteración de la marcha (fl 10 archivo 01).

**Segunda condición: Puede inferirse razonablemente que la carencia del reconocimiento de la pensión de invalidez, afecta la satisfacción de las necesidades básicas del demandante**, como el mínimo vital y la vida en condiciones dignas, ya que se trata de persona sin capacidad física para laborar, se encuentra **desempleado** según quedó consignado en el dictamen médico (fl 10 archivo 01), lo que implica que no cuenta con una fuente de ingresos económicos de los cuales pueda derivar una estabilidad económica.

**Supera también la tercera condición**, al advertirse que la imposibilidad de haber cotizado las semanas previstas por la disposición vigente al momento de la estructuración de la invalidez, pudo obedecer a situaciones objetivas y razonables; teniendo en cuenta que en el dictamen médico realizado en el año 2017, **en el rol laboral/ocupacional quedó consignado que se ha desempeñado como conductor y que no trabaja hace tres (3) años debido a la enfermedad**; por su avanzada edad tampoco cuenta con ambiente favorable para vincularse al mercado laboral; sumado a que se trata de actividad económica en la que también se presenta bastante informalidad y según el historial clínico, **el demandante ha presentado trastornos mentales y de comportamiento, síndrome de dependencia, insomnio no orgánico** (fl 10 archivo 01); situaciones que en su conjunto pueden explicar la ausencia de una vinculación laboral formal y por tanto, la dificultad para haber cotizado las semanas requeridas en la normatividad vigente para la fecha de la estructuración de la invalidez.

Por último, **como cuarta condición, se observa actuación diligente del demandante en el agotamiento de los**

**recursos tendientes a obtener el reconocimiento de la pensión de invalidez**, atendiendo a que fue valorado por COLPENSIONES el 12 de agosto de 2017, reclamó la pensión de invalidez el 20 de septiembre del mismo año, siendo negada mediante acto administrativo del 12 de noviembre de 2017 e interpuso demanda el día 25 de mayo de 2018.

**Al cumplir las cuatro (4) exigencias del test de procedencia, se procede a verificar el cumplimiento del requisito de semanas conforme al Decreto 758 de 1990, en aplicación del principio constitucional de la condición más beneficiosa, con salto normativo, como lo permite la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional.**

Encontrándose que conforme a la historia laboral aportada por COLPENSIONES, actualizada el 8 de enero de 2020, **el señor Luis Guillermo Ibarra Orrego acredita 781,71 semanas cotizadas en toda la vida laboral, de las cuales, 719,84 fueron cotizadas entre el 7 de marzo de 1977 y el 23 de marzo de 1994**, cumpliendo con lo exigido en el artículo 6° del Decreto 758 de 1990, que exige haber cotizado para el seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez o trescientas (300) semanas en cualquier época.

Según lo señala el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, se considera inválida la persona que, por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral; requisito que acredita el demandante, al haber sido calificado con el **51.89% de pérdida de capacidad laboral, de origen común, estructurada el 16 de febrero de 2017.**

Así las cosas, esta Sala de Decisión Laboral encuentra procedente **revocar** la Sentencia absolutoria de Primera Instancia, para en su lugar, **condenar a COLPENSIONES al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa** consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política y la Sentencia SU 556 de 2019 de la H. Corte Constitucional, concordado con el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990.

**Prescripción y disfrute de la pensión de invalidez:**

Conforme a lo indicado en el inciso final del **artículo 40 de la Ley 100 de 1993, el disfrute y causación de la pensión de invalidez se da a partir de la fecha de estructuración de tal estado.**

Por su parte, **el artículo 3° del Decreto 917 de 1999<sup>2</sup>**, preceptuaba que mientras el afiliado recibiera subsidio por incapacidad temporal, no habría lugar a percibir las prestaciones derivadas de la invalidez. Si bien es cierto, esta norma fue derogada por el Decreto 1507 de 2014, también lo es, que **el artículo 10° del Decreto 758 de 1990, contempla que el disfrute de la pensión de invalidez por riesgo común, se reconocerá** a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse en forma periódica y mensual **desde la fecha en que se estructure tal estado**; anotando que cuando el beneficiario estuviere en goce de subsidio por incapacidad temporal, el pago de la pensión de invalidez comenzará a cubrirse al expirar el derecho al mencionado subsidio y según historial generado el 13 de septiembre de 2017 por EPS SURA, el demandante no registra incapacidades (fl 22 archivo 01).

En este caso **no operó prescripción sobre mesadas pensionales** –el derecho a la pensión no prescribe-, toda vez que fue calificado el 12 de agosto de 2017, reclamó la pensión de invalidez el 20 de septiembre de 2017, siendo negada mediante acto administrativo del 10 de noviembre del mismo año e interpuso demanda el día 25 de mayo de 2018 (folio 6); sin que en ese lapso transcurrieran tres (3) años, conforme a lo señalado en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

Por tanto, **se reconocerá el disfrute de la pensión de invalidez a partir del día 16 de febrero de 2017 –fecha de estructuración de la invalidez-.**

#### **Valor y número de mesadas:**

Atendiendo a que el ingreso base de cotización reportado por el afiliado es equivalente al **salario mínimo legal mensual vigente**, en esta cuantía se reconocerá la mesada pensional, con derecho a **13 mesadas** al año, por haberse causado en forma posterior al 31 de julio de 2011, conforme al Parágrafo Transitorio 6° del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005.

#### **Retroactivo pensional:**

Efectuado el cálculo correspondiente, COLPENSIONES adeuda al demandante la suma de **\$62.627.677** por concepto de retroactivo pensional, liquidado desde el **16 de febrero de 2017** hasta el **31 de octubre de 2022**, ambas fechas inclusive, con derecho a 13 mesadas al año.

---

<sup>2</sup> Derogado por el Decreto 1507 del 12 de agosto de 2014 artículos 5° y 6°

RETROACTIVO PENSIONAL			
Año	No mesadas	Valor pensión (SMLMV)	Total Retroactivo
2017	11 mesadas y 15 días	\$ 737.717	\$ 8.483.746
2018	13	\$ 781.242	\$ 10.156.146
2019	13	\$ 828.116	\$ 10.765.508
2020	13	\$ 877.803	\$ 11.411.439
2021	13	\$ 908.526	\$ 11.810.838
2022	10	\$ 1.000.000	\$ 10.000.000
		TOTAL	\$ 62.627.677

A partir del **1° de noviembre de 2022**, COLPENSIONES continuará reconociendo y pagando la pensión de invalidez al demandante, en cuantía equivalente al **salario mínimo legal mensual vigente**, con derecho a **13 mesadas** al año, sin perjuicio de los incrementos legales.

**Intereses moratorios:**

**No hay lugar al reconocimiento de intereses moratorios**, teniendo en cuenta que en su momento, COLPENSIONES negó la prestación económica conforme a lo preceptuado en la normatividad aplicable al caso concreto y en este proceso, se reconoce la prestación conforme a jurisprudencia de la H. Corte Constitucional (mas no de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, que tiene otro criterio sobre el tema); en tales situaciones, esta última Corporación ha precisado que no procede condena por intereses moratorios, cuando las actuaciones de las administradoras de pensiones, al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo, encuentren plena justificación bien porque tengan respaldo normativo o porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la Ley, sin los alcances o efectos que en un momento dado puedan darle los Jueces, en la función que les es propia de interpretar las normas sociales y ajustarlas a los postulados fundamentales de la

seguridad social, y que a las entidades que la gestionan no les compete y les es imposible predecir.

### **Indexación:**

**En subsidio se condenará al reconocimiento y pago de la indexación de las condenas**, ya que constituye un factor que compensa la pérdida de valor real de los dineros que en su oportunidad debieron pagarse; causada desde la fecha de exigibilidad de cada mesada pensional, hasta la fecha en que se efectúe el pago de la obligación, de acuerdo con la certificación del DANE sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor, aplicando la siguiente fórmula:

$$\text{Indexación} = \frac{\text{Índice final}}{\text{Índice inicial}} \times \text{capital} - \text{capital}$$

### **Descuentos en salud:**

**Se autorizará a COLPENSIONES a descontar del valor del retroactivo pensional reconocido, las cotizaciones en salud que correspondan en los términos legales**, conforme a lo dispuesto en el artículo 143 inciso 2 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 42 inciso 3° del Decreto 692 de 1994 y previsiones del artículo 69 del Decreto 2353 de 2015, lo indicado por la **H. Corte Constitucional en la Sentencia SU 230 de 2015** y reiterados pronunciamientos de la **Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia**, entre otras, Sentencias **SL1338 de 2020 Radicado 64254**, **SL522 de 2018 Radicado 66940** y **SL7911 de 2015 Radicado 5757**, en las que ha precisado que una vez surge el status de pensionado, por ministerio de la Ley surge la obligatoriedad de las entidades pagadoras de pensiones de descontar la cotización para el sistema de salud.

### **COSTAS:**

**Se revocará la condena en Costas de Primera Instancia impuestas al demandante; sin condena en Costas de Primera instancia**, teniendo en cuenta que, si bien COLPENSIONES fue vencido en juicio, la negativa de la prestación obedeció a la aplicación de la normatividad legal aplicable. **No se condena en costas en Segunda Instancia** al haber prosperado el recurso de apelación formulado por el apoderado del demandante, conforme a lo establecido en el artículo 365 del Código General del Proceso y el Acuerdo 10554 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

### **DECISIÓN:**

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

### **RESUELVE**

**PRIMERO:** Se **REVOCA** la Sentencia de Primera Instancia, de la fecha y procedencia conocidas que por vía de Apelación se revisa; en su lugar, se **DECLARA** que el demandante señor **LUIS GUILLERMO IBARRA ORREGO C.C. 70.073.780**, tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, conforme al artículo 53 de la Constitución Política y la Sentencia SU 556 de 2019 de la H. Corte Constitucional, concordado con el Decreto 758 de 1990; con disfrute a partir del **16 de febrero de 2017**, en cuantía

equivalente al **salario mínimo legal mensual vigente**, con derecho a **13 mesadas al año**, sin perjuicio de los incrementos legales; en consecuencia, se **CONDENA** a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**, a reconocer y pagar al demandante:

a) La suma de **\$62.627.677** por concepto de retroactivo pensional, liquidado desde el **16 de febrero de 2017** hasta el **31 de octubre de 2022**, ambas fechas inclusive.

b) A partir del **1º de noviembre de 2022**, COLPENSIONES continuará pagando al demandante la pensión de invalidez, en cuantía equivalente al **salario mínimo legal mensual vigente**, con derecho a **13 mesadas al año**, sin perjuicio de los incrementos legales.

c) Se **CONDENA** a **COLPENSIONES** a pagar la **indexación** de las mesadas pensionales reconocidas, desde la fecha en la que debió pagarse cada una de ellas, hasta la fecha en que se efectúe el pago de la obligación, de acuerdo a la certificación del DANE sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor y a la fórmula indicada en la parte motiva de esta providencia.

Todo lo anterior de conformidad con lo explicado en la parte considerativa de esta Sentencia.

**SEGUNDO:** Se **AUTORIZA** a **COLPENSIONES** a **descontar** del retroactivo pensional reconocido, **las cotizaciones en salud que correspondan en los términos legales**; conforme a lo expresado en las consideraciones.



**TERCERO: Se revoca la condena en Costas impuesta en Primera Instancia** a cargo de la demandante, en su lugar, se absuelve por este concepto. **Sin condena en Costas en Primera Instancia, ni en Segunda Instancia;** según lo indicado en la parte motiva.

**CUARTO:** Lo resuelto se notifica por **EDICTO**, en el término de un (1) día; se ordena devolver el proceso al Despacho de origen. En constancia se firma el Acta por quienes en ella intervinieron.


**Los Magistrados,**



**MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**



**NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR**



**VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**



**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  
SECRETARIA SALA LABORAL  
EDICTO VIRTUAL**

**HACE SABER:**

**Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:**

**Proceso** : Ordinario de Segunda Instancia  
**Demandante** : **LUIS GUILLERMO IBARRA ORREGO**  
**Demandadas** : **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES**  
**Radicado** : **05001 31 05 001 2018 00304 01**  
**Providencia** : Sentencia  
**Temas y Subtemas** : Seguridad Social – pensión invalidez de origen común, principio de la condición más beneficiosa -.  
**Decisión** : Revoca Sentencia absolutoria  
**Sentencia No** : 281

**FECHA SENTENCIA:** 25 de noviembre de 2022

**CONSTANCIA DE FIJACIÓN**

**CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN**

Fijado hoy lunes 28 de noviembre de 2022 a las 8:00 Am Desfijado hoy lunes 28 de noviembre de 2022 a las 5:00 Pm

Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 ibídem. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del termino de fijación del edicto.

**RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS**  
SECRETARIO